

Boletín



Oficial

DE

LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publican los martes jueves y sábados de cada semana en la capital. Imprimida en el

Bravero, Precio de suscripción del Rey, n.º 18.

En las demás provincias, en las principales librerías; y en su localidad en la

Precios de suscripción, en Orense, por trimestre, 2 ESCUDOS.

—Para fuera de esta capital, franco de porte por trimestres adelantados, 3 ES. VEN.

Números sueltos, 150 MILÉSIMAS.

CONSTITUCIÓN

DE LA

MONARQUÍA ESPAÑOLA.

La Nación española, y en su nombre las Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad, y proveer al bien de cuantos vivan en España, decretan y sanctionan la siguiente Constitución.

TITULO I.

DE LOS ESPAÑOLES Y SUS DERECHOS.

Artículo 1.º Son españoles: Toda persona nacida en territorio español.

2.º Los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.

3.º Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.

4.º Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo del territorio español.

5.º Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito.

Art. 3.º Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.

Toda detención se dejará sin efecto, si se elevará á prisión dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al juez competente. La providencia que se dictare, se notificará al interesado dentro del mismo plazo.

Art. 4.º Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez competente. El auto por el cual se haya dictado el encarcelamiento, se ratificará o repondrá, oído el presunto reo, dentro de las setenta y dos horas siguientes al acto de la prisión.

Art. 5.º Ningún español podrá entrar en el domicilio de un español ó extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos urgentes de incendio, inundación, o otro peligro análogo, adentro ó para ayudar á persona que casas la entrada en el domicilio de un español ó extranjero residente en España.

zobrando y estableciendo el que podrán secretarse por juez competente y ejecutarse de dia. El registro de papeles y efectos tendrá siempre lugar á presencia del interesado ó de su individuo de su familia y en su defecio, de dos testigos vecinos del mismo pueblo. Sin embargo, estando un delincuente hallado infraganti y perseguido por la autoridad ó sus agentes se refugie en su domicilio, podrán estos penetrar en él sólo para el acto de la aprehension. Si se refugiase en domicilio ajeno, procederá requerimiento abogado de este.

Art. 6.º Ningún español podrá ser compelido á quitar de domicilio ó de residencia sino en virtud de sentencia ejecutoria.

Art. 7.º En ningún caso podrá detenerse ni abrirse por la autoridad gubernativa la correspondencia confiada al correo, ni tampoco detenerse la telegrafía obstante lo contrario.

Pero en virtud de auto de juez competente podrán detenerse una y otra correspondencia, y también abrirse en presencia del procesado, la que se dirija por el correo.

Art. 8.º Todo auto de prisión, de registro de morada ó de detención de la correspondencia escrita ó telegráfica será motivado.

Cuando el auto carezca de este requisito, ó cuando los motivos en que se haya suelto se declaren en juicio, ilegítimos ó mayoritariamente insuficientes, la persona que hubiere sido presa, ó cuya prisión no se hubiere ratificado dentro del plazo señalado en el art. 4.º, ó cuyo domicilio hubiere sido allaudado, ó cuya correspondencia hubiere sido detenida, tendrá derecho a reclamar del juez que haya dictado el auto, una indemnización proporcionada al daño causado, pero nunca inferior de 500 pesetas.

Los agentes de la autoridad pública estarán asimismo sujetos á la indemnización que regule el juez, cuando reciban en prisión á cualquiera persona, sin mandamiento en que se inserte el auto motivado, ó cuando la retengan sin que dicho auto haya sido ratificado dentro del término legal.

Art. 9.º La autoridad gubernativa que asfixia lo prescrito en los artículos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º, incurirá, segun los casos, en la de detención arbitraria ó de allanamiento de morada, y quedará ademas sujeta á la indemnización prescrita en el párrafo 2.º del artículo anterior.

Art. 10. Tendrá asimismo derecho á indemnización regulada por el juez, todo detenido que dentro del término señalado en el artículo 5.º no haya sido entregado á la autoridad judicial.

Si el juez, dentro del término prescrito en dicho artículo, no elevase á prisión la detención, estará obligado para con el detenido á la indemnización que establece el artículo 8.º

Art. 11. Ningún español podrá ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó tribunal á quien en virtud de leyes anteriores, al delito, compete el conocimiento y en la forma que estas prescriban.

No podrán crearse tribunales extraordinarios ni comisiones especiales para conocer de ningún delito.

Art. 12. Toda persona detenida ó presa sin las formalidades legales, ó fuera de los casos previstos en esta Constitución, será puesta en libertad á petición suya, ó de cualquier español.

La ley determinará la forma de proceder sumariamente en este caso, así como las penas, personales y pecuniarias en que haya de incurrir el que ordenare, ejecutare ó hiciere ejecutar la detención ó prisión ilegal.

Art. 13. Nadie podrá ser privado temporal, ó perpetuamente de sus bienes y derechos, ni turbado en la posesión de ellos, sino en virtud de sentencia judicial.

Los funcionarios públicos que, bajo cualquier pretexto infrinjan esta prescripción, serán personalmente responsables del daño causado.

Quedan exceptuados de ella los casos de incendio e inundación ó otros semejantes análogos, en que por la ocupación se haya de escusar un peligro al propietario ó poseedor, ó evitar ó alejar el mal que se temiere ó hubiere sobrevenido.

Art. 14. Nadie podrá ser despojado de sus bienes sino por causa de utilidad común, y en virtud de mandamiento judicial, que no se ejercerá sin prévia indemnización regulada por el juez con intervención del interesado.

Art. 15. Nadie está obligado á pagar contribución que no haya sido votada por las Cortes ó por las corporaciones populares legalmente autorizadas para imponerla, y cuya cobranza no se haga en la forma prescrita por la ley.

Todo funcionario público que intente exigir, ó exija el pago de una contribución sin los requisitos prescritos en este artículo, incurirá en el delito de extorsión ilegal.

Art. 16. Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones de Senadores, Diputados á Cortes, Diputados provinciales y concejales.

Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningun español:

1.º Del derecho de emitir libremente

sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la impresa ó de otro procedimiento semejante.

2.º Del derecho de reunirse pacíficamente.

3.º Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios á la moral pública.

4.º Del derecho de dirigir peticiones individual ó colectivamente á las Cortes, al Rey y á las autoridades.

Art. 18. Toda reunión pública estará sujeta á las disposiciones generales de policía. Las reuniones al aire libre y las manifestaciones políticas solo podrán celebrarse de dia.

Art. 19. A toda asociación cuyos individuos delinquieren por los medios que la misma les proporcione, podrá imponérse la pena de disolución.

La autoridad gubernativa podrá suspender la asociación que delinque, sometiéndole incontinenti los reos al juez competente.

Toda asociación cuyo objeto ó cuyos medios comprometan la seguridad del Estado, podrá ser disuelta por una ley.

Art. 20. El derecho de petición no podrá ejercerse colectivamente por ninguna clase de fuerza armada.

Tampoco podrán ejercerlo individualmente los que formen parte de una fuerza armada, sino con arreglo á las leyes de su instituto, en cuanto tenga relación con este.

Art. 21. La Nación se obliga á mantener el culto y los ministros de la religión católica.

El ejercicio público ó privado de cualquier otro culto queda garantido á todos los extranjeros residentes en España, sin mas licitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho.

Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable á los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 22. No se establecerá, ni por las leyes, ni por las autoridades, disposicion alguna preventiva, que se refiera al ejercicio de los derechos definidos en este título. Tampoco podrá establecerse la censura, el depósito, ni el editor responsible para los periódicos.

Art. 23. Los delitos que se cometan con ocasión del ejercicio de los derechos consignados en este título, serán penados por los tribunales con arreglo á las leyes comunes.

Art. 24. Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción ó de educación, sin prévia licencia, salva la inspección de la autoridad competente, por razones de higiene y moralidad.

Art. 25. Todo extranjero podrá establecerse libremente en territorio español, ejercer en él su industria ó dedicarse a cualquiera profesión, para cuya desempeño no exijan las leyes títulos de aptitud expedidos por las autoridades españolas.

Art. 26. A ningún español que esté en el pleno goce de sus derechos civiles podrá impedirse salir libremente del territorio, ni trasladar su residencia y bienes á país extranjero, salvo las obligaciones de contribuir al servicio militar ó al mantenimiento de las cargas públicas.

Art. 27. Todos los españoles son admisibles á los empleos y cargos públicos, segun su mérito y capacidad.

La obtención y el desempeño de estos cargos, así como la adquisición y el ejercicio de los derechos civiles y políticos, son independientes de la religión que profesan los españoles.

El extranjero que no estuviese naturalizado no podrá ejercer en España cargo alguno que tenga aneja autoridad ó jurisdicción.

Art. 28. Todo español está obligado á defender la patria con las armas cuando sea llamado por la ley, y contribuir á los gastos del Estado en proporción de sus bienes.

Art. 29. La enumeración de los derechos consignados en este título no implica la prohibición de cualquiera otro no consignado expresamente.

Art. 30. No será necesaria la previa autorización para procesar ante los tribunales ordinarios á los funcionarios públicos, cualquiera que sea el delito que cometieren.

El mandato del superior no eximirá de responsabilidad en los casos de infracción manifiesta, clara y terminante de una prescripción constitucional. En los demás solo eximirá á los agentes que no ejerzan autoridad.

Art. 31. Las garantías consignadas en los artículos 2.º, 3.º y 6.º, y párrafos 1.º, 2.º y 5.º del 17, no podrán suspenderse en toda la Monarquía, ni en parte de ella, más temporalmente y por medio de una ley, cuando así lo exija la seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias.

Promulgada aquella, el territorio á que se aplicare se regirá, durante la suspensión, por la ley de orden público establecida de antemano.

Pero si en una ni en otra ley se podrán suspender mas garantías que las consignadas en el primer párrafo de este artículo, ni autorizar al gobierno para extrañar del reino, ni deportar á los españoles, ni para desterrarlos á distancia de mas de 250 kilómetros de su domicilio.

En ningún caso los jefes militares ó civiles podrán establecer ó determinar otra penalidad que la prescrita previamente por la ley.

TITULO II.

DE LOS PODERES PÚBLICOS.

Art. 32. Todos los poderes emanen de la nación.

Art. 33. La forma de gobierno de la nación española es la monarquía.

Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes.

El rey sanciona y promulga las leyes.

Art. 35. El Poder Ejecutivo reside en el rey que lo ejerce por medio de sus ministros.

Art. 36. Los tribunales ejercen el Poder judicial.

Art. 37. La gestión de los intereses peculiares de los pueblos y de las provincias corresponde respectivamente á los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales con arreglo á las leyes.

TITULO III.

DEL PODER LEGISLATIVO.

Art. 38. Las Cortes se componen de

dos cuerpos colegisladores, á saber: Senado y Congreso. Ambos cuerpos son iguales en facultades, excepto en los casos previstos en la Constitución.

Art. 39. El Congreso se renovará totalmente cada tres años. El Senado se renovará por cuartas partes cada tres años.

Art. 40. Los senadores y diputados representarán á toda la nación, y no exclusivamente á los electores que los eligieron.

Art. 41. Ningún senador ni diputado podrá admitir de sus electores mandato alguno imperativo.

SECCION PRIMERA.

De la celebración y facultades de las Cortes.

Art. 42. Las Cortes se reunirán todos los años.

Corresponde al rey convocarlas, suspender y cerrar sus sesiones, y disolver uno de los Cuerpos colegisladores, ó ambos á la vez.

Art. 43. Las Cortes estarán reunidas á lo menos cuatro meses cada año, sin incluir en este tiempo el que se invierta en su constitución. El rey las convocará, á más tardar, para el dia 1.º de febrero.

Art. 44. Las Cortes se reunirán necesariamente luego que vacante la corona ó que el rey se impossibilitare de cualquier modo para el gobierno del Estado.

Art. 45. Cada uno de los Cuerpos colegisladores tendrá las facultades siguientes:

1.º Formar el respectivo reglamento para su gobierno interior.

2.º Examinar la legalidad de las elecciones y la aptitud legal de los individuos que lo compongan.

3.º Nombrar, al constituirse, su Presidente, Vice-presidentes y Secretarios.

Mientras el Congreso no sea disuelto, su Presidente, Vice-presidentes y Secretarios del Senado se renovarán siempre que haya elección general de dichos cargos en el Congreso.

El Presidente, Vice-presidentes y Secretarios del Senado se renovarán siempre que haya elección general de dichos cargos en el Congreso.

Art. 46. No podrá estar reunido ninguno de los Cuerpos colegisladores sin que lo esté también el otro, excepto el caso en que el Senado se constituya en tribunal.

Art. 47. Los Cuerpos colegisladores no pueden deliberar juntos, ni en presencia del rey.

Art. 48. Las sesiones del Senado y las del Congreso serán públicas, excepto en los casos que necesariamente exijan reserva.

Art. 49. Ningún proyecto podrá llegar á ser ley sin que antes sea votado en los dos Cuerpos colegisladores.

Si no hubiere absoluta conformidad entre ambos, se procederá con arreglo á la ley que fija sus relaciones.

Art. 50. Los proyectos de ley sobre contribuciones, crédito público y fuerza militar se presentarán al Congreso antes que al Senado, y si este hiciere en ellos alguna alteración que aquél no admita, prevalecerá la resolución del Congreso.

Art. 51. Las resoluciones de las Cortes se tomarán á pluralidad de votos.

Para votar las leyes se requiere en cada uno de los Cuerpos colegisladores la presencia de la mitad mas uno del número total de los individuos que tengan aprobadas sus actas.

Art. 52. Ningún proyecto de ley puede aprobarse por las Cortes sin despues haber sido votado, artículo por artículo, en cada uno de los Cuerpos colegisladores.

Exceptúase los Códigos ó leyes que por su naturaleza no se presenten á la discusión por artículos; pero, aun en este caso, los respectivos proyectos se someterán integros a las Cortes.

Art. 53. Ambos Cuerpos colegisla-

dores tienen el derecho de censura, y cada uno de sus individuos el de interpellación.

Art. 54. La iniciativa de las leyes corresponde al rey y á cada uno de los Cuerpos colegisladores.

Art. 55. No se podrán presentar en persona, individual ni colectivamente, peticiones á las Cortes.

Ninguno podrá celebrarse, cuando las Cortes estén abiertas, reuniones al aire libre en los alrededores del palacio de ninguno de los Cuerpos colegisladores.

Art. 56. Los Senadores y los Diputados no podrán ser procesados ni detenidos, cuando estén abiertas las Cortes, sin permiso del respectivo Cuerpo colegislador, á no ser hallados *in fraganti*. Así en este caso, como en el de ser procesados ó arrestados mientras estuvieren cercadas las Cortes, de cada cuenta al Cuerpo á que pretenezca, tal luego como se señale.

Cuando se hubiere dictado sentencia contra un Senador ó Diputado, en proceso seguido sin el permiso á que se refiere el párrafo anterior, la sentencia no podrá llevarse á efecto hasta que autorice su ejecución el del Cuerpo á que pertenezca el procesado.

Art. 57. Los Senadores y Diputados son inviolables por las opiniones y notas que emitan en el ejercicio de su cargo.

Art. 58. Ademas de la potestad legislativa, corresponde á las Cortes:

1.º Recibir al rey, al sucesor inmediato de la Corona y á la regencia el juramento de guardar la Constitución y las leyes.

2.º Resolver cualquier duda de hecho ó de derecho que ocurra en orden á la sucesión de la corona, el trono o la

3.º Elegir la regencia del reino y nombrar el tutor del rey menor cuando lo precise la Constitución.

4.º Hacer efectiva la responsabilidad de los Ministros, tanto en su ejercicio

Y 5.º Nombrar y separar libremente los ministros del Tribunal de Cuentas del Reino, sin que el nombramiento pueda recaer en ningún Senador ni Diputado, ni el contrario suceda en los otros.

Art. 59. El Senador ó Diputado que acepte del Gobierno ó de la casa real, pension, emplazamiento, con sueldo, honores ó condecoraciones, se entenderá que renuncia su cargo. Exceptuase de esta disposición el empleo de Ministro de la Corona.

Art. 60. Para ser elegido diputado se requiere:

1.º Ser español.

2.º Mayor de edad.

Y gozar de sus derechos civiles.

Art. 61. Para ser elegido senador se requiere:

1.º Ser español.

2.º Mayor de edad.

Y gozar de sus derechos civiles.

Art. 62. La persona del rey es inviolable, y no está sujeta á responsabilidad. Son responsables los ministros.

Art. 63. El rey nombra y separa libremente sus ministros.

Art. 64. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto conduce á la conservación del orden público en lo interior, y á la seguridad del Estado en lo exterior conforme á la Constitución y á las leyes.

Art. 65. El Congreso se compondrá de un diputado al menos por cada 10.000 almas de población, elegido con arreglo á la ley electoral que no sea menor de 10.000 habitantes.

Art. 66. Para ser elegido diputado se requiere:

1.º Ser español.

2.º Mayor de edad.

Y gozar de sus derechos civiles.

Art. 67. La persona del rey es inviolable, y no está sujeta á responsabilidad. Son responsables los ministros.

Art. 68. El rey nombra y separa libremente sus ministros.

Art. 69. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto conduce á la conservación del orden público en lo interior, y á la seguridad del Estado en lo exterior conforme á la Constitución y á las leyes.

Art. 70. El rey dispone de las fuerzas de mar y tierra, declara la guerra y hace y ratifica la paz, déjido después su consentimiento.

Art. 71. Una sola vez el cada legislatura podrá el rey suspender las Cortes sin el consentimiento de éstas.

En todo caso las Cortes no podrán dejar de estar reunidas el tiempo señalado en el art. 43.

Art. 72. Si el rey de disolución de uno ó de ambos Cuerpos colegisladores, el real decretó contendrá necesariamente la convocatoria de las Cortes para dentro de tres meses.

Art. 73. Además de las facultades

Diputados electos en tres elecciones generales ó una vez para Cortes Constituyentes.

Ministro de la Corona.

Presidente del Consejo de Estado, de los Tribunales supremos, del Consejo supremo de la Guerra y del Tribunal de Cuentas del Reino.

Capitán general de ejército ó almirante.

Teniente general ó vicealmirante.

Lombajadores.

Consejero de Estado.

Juez mayor de los Tribunales supremos, individuo del Consejo supremo de la Guerra y del Almirantazgo, ministro del Tribunal de Cuentas ó ministro plenipotenciario durante dos años.

Arzobispo ó Obispo.

Rector de Universidad de la clase de catedráticos.

Catedrático de término con dos años del ejercicio.

Presidente ó Director de las academias Españolas de la Historia, de Nobles Artes, de Ciencias morales y políticas, de Ciencias exactas, físicas y naturales, y de Ciencias médicas.

Inspector general de los Cuerpos de ingenieros civiles.

Diputado provincial cuatro veces.

Alcalde dos veces en pueblos de mas de 30.000 almas.

Art. 63. Serán además elegibles los cincuenta mayores contribuyentes por contribución territorial y los veinticinco mayores por subsidio industrial y comercial de cada provincia.

Art. 64. El Senado se renovará por cuartas partes con arreglo á la ley electoral, cada vez que se hagan elecciones generales de diputados, organizadas en distritos.

La renovación será total cuando el rey disuelva el Senado.

Art. 65. El Congreso se compondrá de un diputado al menos por cada 10.000 almas de población, elegido con arreglo á la ley electoral que no sea menor de 10.000 habitantes.

Art. 66. Para ser elegido diputado se requiere:

1.º Ser español.

2.º Mayor de edad.

Y gozar de sus derechos civiles.

Art. 67. La persona del rey es inviolable, y no está sujeta á responsabilidad.

Son responsables los ministros.

Art. 68. El rey nombra y separa libremente sus ministros.

Art. 69. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey, y su autoridad se extiende á todo cuanto conduce á la conservación del orden público en lo interior, y á la seguridad del Estado en lo exterior conforme á la Constitución y á las leyes.

Art. 70. El rey dispone de las fuerzas de mar y tierra, declara la guerra y hace y ratifica la paz, dejado después su consentimiento.

Art. 71. Una sola vez el cada legislatura podrá el rey suspender las Cortes sin el consentimiento de éstas.

En todo caso las Cortes no podrán dejar de estar reunidas el tiempo señalado en el art. 43.

Art. 72. Si el rey de disolución de uno ó de ambos Cuerpos colegisladores, el real decretó contendrá necesariamente la convocatoria de las Cortes para dentro de tres meses.

Art. 73. Además de las facultades

necesarias para la ejecución de las leyes, corresponde al rey: 1.º convocar y convocar de la ejecución de la

2.º Casar de la ejecución de la

3.º Conferir los empleos civiles y militares con arreglo á las leyes.

3.^a Conceder en igual forma honores y distinciones.

4.^a Dicir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias.

5.^a Cuidad de que en todo el reino se administre justicia y cumplida justicia.

Y 6.^a Indultar a los delincuentes, con arreglo a las leyes, salvo lo dispuesto relativamente a los ministros.

Art. 74. El rey necesita estar autorizado por una ley especial:

1.^a Para ensenar, redactar ó permitir cualquier parte del territorio español:

2.^a Para suscitar, qualquiera otro territorio al territorio español:

3.^a Para admitir tropas extranjeras en el reino.

4.^a Para ratificar los tratados de alianza ofensiva, los ejercicios de comercio, los que estipulen dar subsidios á una potencia extranjera, y todos aquellos que puedan obligar individualmente á los españoles.

En ningún caso los artículos secretos de un tratado podrán derogar los públicos.

5.^a Para conceder amnistías e indultos generales.

6.^a Para contraer matrimonio y para permitir que los contraigan las personas que sean subditos suyos y tengan derechos suyos en la corona, segun la constitución.

Y 7.^a Para abdicar la corona.

Art. 75. Al rey corresponde la facultad de hacer reglamentos para el cumplimiento y aplicación de las leyes, previos los requisitos que las mismas señalen.

Art. 76. La dotación del rey se fijará al principio de cada reinado.

Art. 77. La autoridad real será hereditaria.

La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma linea el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado el varón á la hembra, y en el mismo sexo la persona de más edad á la de menor.

Art. 78. Si llegare á extinguirse la dinastía que gobierna á la posesión de la corona, las Cortes harán nuevos nombramientos como más convenga á la nación.

Art. 79. Cuando falleciere el rey, el sucesor rey jurará guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes del mismo modo y en los mismos términos que las Cortes decretaron para el príncipe que ocupó el trono conforme á la Constitución.

Igual juramento prestará el Príncipe de Asturias cuando cumpla 18 años.

Art. 80. Las Cortes excluirán de la sucesión á aquellas personas que sean incapaces para gobernar o hayan hecho cosas porque merezcan perder el derecho á la corona.

Art. 81. Cuando reine una hembra, su marido no tendrá pasaje ninguna en el gobierno del reino.

Art. 82. El rey es mayor de edad á los 18 años.

Art. 83. Cuando el rey se imposibilite para ejercer su autoridad, y la imposibilidad fuere reconocible por las Cortes, el rey rendirá la corona siendo de menor que el sucesor sucesor, y gobernarán las Cortes hasta que el rey una persona compuesta de una, tres ó cinco personas.

Art. 84. Hasta que las Cortes nombran la regencia será gobernado el reino por el consejo de ministros.

Art. 85. La regencia ejercerá toda la autoridad del rey, en cuyo nombre se publicarán los actos del gobierno.

Durante la regencia no puede hacerse variación alguna en la Constitución.

Art. 86. Será tutor del rey, menor el que le hubiere nombrado en su testamento el rey disipado. Si este no le hubiere nombrado recogerá la tutela en el padre y en su defecto en la madre mientras permanezcan viudos.

A falta de tutor testamentario ó legítimo, lo nombrarán las Cortes.

En el primero y tercer caso el tutor de ser español de nacimiento. Las Cortes tendrán respecto de la tutela del rey, las mismas facultades que les concede el art. 80 en cuanto á la sucesión á la corona.

Los cargos de regente y de tutor del rey no pueden estar reunidos sién en el caso de la muerte del rey.

TITULO VI.

suspensivos por auto del tribunal competente.

Art. 96. Los tribunales, bajo su responsabilidad, no darán posesión á los magistrados ó jueces que no hubieren sido nombrados con arreglo á la Constitución y á las leyes.

Art. 97. Los ascensos en la carrera judicial se harán á consulta del Consejo de Estado.

Art. 98. Los jueces son responsables personalmente de toda infracción de ley que cometan, según lo que determine la ley de responsabilidad judicial.

Todo español podrá entablar acción pública contra los jueces ó magistrados por los delitos que cometieren en el ejercicio de su cargo.

TITULO VII.

DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

Y AYUNTAMIENTOS

Art. 99. La organización y atribuciones de las diputaciones provinciales y ayuntamientos se regirán por sus respectivas leyes.

Estas se ajustarán á los principios siguientes:

1.^a Gobierno y dirección de los intereses peculiares de la provincia ó del pueblo por las respectivas corporaciones.

2.^a Publicidad de las sesiones de unas y otras, dentro de los límites señalados por la ley.

3.^a Publicación de los presupuestos, cuentas y acuerdos importantes de las mismas.

4.^a Intervención del rey, y en su caso de las Cortes, para impedir que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos se超rallen de sus atribuciones en perjuicio de los intereses generales y permanentes.

V 5.^a Determinación de sus facultades en materia de impuestos, á fin de que los provinciales y municipales no se hallen nunca en oposición con el sistema tributario del Estado.

TITULO VIII.

DE LAS CONTRIBUCIONES Y DE LA FUERZA PÚBLICA

Art. 100. El gobierno presentará todos los años á las Cortes los presupuestos de gastos y de ingresos, expresando las alteraciones, que haya hecho en los del año anterior.

Cuando las Cortes se reunan el 1.^o de febrero, los presupuestos habrán de presentarse al Congreso dentro de los 10 días siguientes á su reunión.

Art. 101. El gobierno presentará al mismo tiempo que los presupuestos el balance del último ejercicio con arreglo á la ley.

Art. 102. Ningún pago podrá hacerse sin acuerdo de la ley de presupuestos ó otra especial, y por orden del Ministro de Hacienda, en la forma y bajo la responsabilidad que las leyes determinen.

Art. 103. El gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades del Estado, y para tomar caudales á préstamo sobre el crédito de la Nación.

Art. 104. La Deuda pública está bajo la salvaguardia especial de la Nación.

No se hará ningún empréstito sin que se voten al mismo tiempo los recursos necesarios para pagar los intereses.

Art. 105. Todos los leyes referentes á ingresos, gastos públicos ó crédito público se considerarán como parte del presupuesto y se publicarán con este carácter.

Art. 106. Las Cortes fijarán todos los años, á propuesta del Rey, las fuerzas militares de mar y tierra.

Las leyes que determinen estas fuerzas se votarán antes que la de presupuestos.

Art. 107. No puede existir en territorio español fuerza armada permanente que no esté autorizada por una ley.

TITULO X.

DE LAS PROVINCIAS DE ULTRAMAR.

Art. 108. Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual del gobierno de las provincias de Ultramar, cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba ó Puerto Rico, para hacer extensivos á las mismas, con las modificaciones que se creyeren necesarias, los derechos consignados en la Constitución.

Art. 109. El régimen porque se gobernan las provincias españolas situadas en el Archipiélago Filipino será reformado por una ley.

TITULO XI.

DE LA REFORMA DE LA CONSITUCIÓN.

Art. 110. Las Cortes, por sí ó a propuesta del Rey, podrán aprobar la reforma de la Constitución, señalando al efecto el artículo o artículos que hayan de alterarse.

Art. 111. Hecha esta declaración, el Rey disolverá el Senado y el Congreso, y convocará nuevas Cortes, que se reunirán dentro de los tres meses siguientes. En la convocatoria se insertará la resolución de las Cortes de que habla el artículo anterior.

Art. 112. Los Cuerpos colegisladores tendrán el carácter de Constituyentes, tan solo para deliberar acerca de la reforma, continuando después, con el de Cortes ordinarias.

Mientras las Cortes sean Constituyentes, no podrán ser disueltos ninguno de los Cuerpos colegisladores.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo 1.^a La ley que en virtud de esta Constitución se forme para la elección de la persona del Rey y para resolver las cuestiones á que esta elección dieje lugar, formará parte de la Constitución.

Art. 2.^a Hasta que, promulgada la ley orgánica de Tribunales, tengan cumplido efecto los artículos 91, 95, 96 y 97 de la Constitución, el Poder ejecutivo podrá dictar las disposiciones conducentes á su aplicación en la parte que sea posible.

Palacio de las Cortes en Madrid á 1.^o de junio de 1869.—(Siguen las firmas.)

GOBIERNO DE PROVINCIA

La Dirección general de Rentas Estancadas y Loterías con fecha 13 del actual me dice, lo siguiente:

En el sorteo celebrado en este día para adjudicar el premio de 250 escudos concedido en cada uno á las liñeras de Militares y patriotas muertos en campaña, ha cabido en suerte dicho premio á Doña Francisca Canellas y Capdevila, hija de D. José, soldado del batallón Franco de Cataluña, muerto en el campo del honor.

Lo que he dispuesto se inserte en este periódico oficial para que llegue á noticia de la interesada. Orense 8 de junio de 1869.—El Gobernador, Alejandro González Olivares.

DIPUTACION PROVINCIAL.

Circular.

Con arreglo á lo dispuesto por el artículo 15 del decreto del Ministerio de la Gobernación de 3 de abril último, y de conformidad con la Excelentísima Diputación provincial, he acordado fijar los días que a continuación se expresan para el ingreso

en Caja de los quintos correspondientes al reemplazo del corriente año.

Dia 4. Pajie, Entruno, Lebora, Lobios, Munies, Padrenda, Verea, Carballito, Pinor, Cea, Irijo.

Dia 6. Maside, Beariz, Boborás, San Aquaro.

Dia 7. Celanova, Cartelle, Bola, Cortegada, Acebedo.

Dia 8. Freás de Eiras, Gomisende, Merca, Puenteveda, Quiñela de Leirado, Villamea, Villanueva de los Infantes.

Dia 9. Cinzo, Allariz, Baños de Molgas, Baltar.

Dia 10. Blancos, Calbos de Randin, Maceada, Junquera de Espadanedo, Moreiras, Portuera, Rairiz de Veiga.

Dia 11. Sandiánes, Sarreaus, Trasmíras, Villag de Barrio, Villar de Santos, Abion, Arnoya.

Dia 12. Ribadavia, Leiro, Melon, Beade, Carballeda de Abia, Castrelo de Miño, Cenlle.

Dia 13. Castro Caldelas, Laroco, Chandrexa, Manzaneira, Montederramo, Paradela del Sil.

Dia 14. Puebla de Trives, Viñas, San Juan de Rio, Teixeira, Villarino de Conso.

Dia 15. Barco, Vega, Bollo, Carballeda de Valdeorras.

Dia 16. Petín, Rúa, Rubiana, Villaseca, Cuestelo del Valle, Cualedro.

Dia 17. Verín, Ríes, Mezquita, Villardebós.

Dia 18. Laza, Gudina, Monterrey, Oimbra, Ameiro, Barbadanes.

Dia 19. Negreira de Ramón, Peroja, Peirete de Aguiar.

Dia 20. Orense, San Ciprián, Toén, Vilamari.

Dia 21.

Ganedo, Coles, Esgos, Junquera de Ambia, Paderne, Taboadela.

La entrega de los quintos en Ourense empezará todos los días a las seis de la mañana, y por lo tanto los comisionados, de los Ayuntamientos presentarán a dicha hora en los que respectivamente se han señalado los soldados y suplentes para cubrir sus cupos.

Para la salida y traslación de los quintos a esta capital, los Ayuntamientos tendrán muy presentes todas las disposiciones prescritas en los artículos del capítulo 9.^o de la ley de 30 de enero de 1856, a fin de cumplimentarlas y prevenir omisiones de que serían responsables.

Los comisionados de los Ayuntamientos, además de no tener interés en el reemplazo, por lo tocante al Ayuntamiento que representen, deben ser personas competentes para desempeñar cuál corresponde su cometido, y dar las explicaciones convenientes en los casos que sean necesarias.

Con la certificación literal y documentos de que habla el art. 106 de la citada ley, se entregará a los comisionados, con arreglo a las disposiciones 10.^o y 11.^o del decreto del Ministerio de la Gobernación de 3 de abril último, una lista en que se haga constar por metros y milímetros las tallas de todos los mozos que hayan sido medidos en el Ayuntamiento para declarar los soldados y suplentes, sin que de ella se exceptúen por lo tanto los cortos ni los escluidos por otras excepciones, é igualmente la relación duplicada de todos los declarados soldados y suplentes en la que también se comprenderán los reclamados y los ausentes, expresando el nombre de cada uno, el número que le tocó en suerte, la fecha de su nacimiento, y los años, meses y días de la edad cumplida el 30 de abril del corriente.

También se hará entrega a los comisionados, de los soldados, suplentes y reclamados, que hayan de ser conducidos a esta capital, a fin de que hiciéndose cargo de aquellos los presenten a debido tiempo en la Caja de quintos.

Y por último resta manifestar a los ayuntamientos que, prestándose las operaciones de las quintas a abusos de grande trascendencia é impunitud cuando no se oye la voz de la conciencia, de la razón y de la justicia y no se respetan los preceptos más minuciosos de la ley, estoy decidido con el doble carácter de Gobernador y Presidente de la Exma. Diputación provincial a castigar pronta y energicamente cualquier desman que se cometa tanto por cualquier delegado de mi autoridad, lo cual no es de esperar, cuanto por otras personas desgraciadamente muy conocidas ya en los reprobados manejos de la quinta. A este fin los Sres. Alcaldes cuidarán bajo su más estrecha responsabilidad de evitar en lo posible aquellos abu-

sos lamentables, procediendo severamente, sin consideración, contra los delincuentes, y previa la formación de expediente, pasar el tanto de culpa a los tribunales ordinarios á los efectos que haya lugar.

Signifiqué V. á las familias, ó padres de los mozos sorteados, por los medios que su celo e hustación le sugieren, la conveniencia de que no se valgan de ciertas personas que, bajo el pretesto de librarse su hijo, no se cuidan en los medios de establecer prometiéndoles un resultado favorable que nunca pueden cumplir.

La Exma. Diputación, celosa por el bien público que representa, está dispuesta á oír constantemente las quejas que se le dirijan, y á administrar como acostumbra, la más imparcial y recta justicia, tal como lo exige un asunto de tan reconocida y trascendental importancia.

Orense 8 de junio de 1869.—El Gobernador, presidente, Alejandro González Olivares.—Joaquín Vila Yáñez, secretario.—Sr. Alcalde presidente del Ayuntamiento de

de riqueza de este distrito municipal que ha de servir de base para el desarrollo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería en el año económico de 1869, al 30 de junio, se hace presente á los vecinos y forasteros, terratenientes en este distrito, como en los demás días siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, se halla expuesto al público en la Secretaría de Ayuntamiento para que expongan de agravios, pasados los cuales no serán oídos.

Carballeda de Valdeorras, junio 6 de 1869.—Felipe Tato.

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

D. Santos de la Torre, escribano de número de la ciudad de Orense y su partido.

Certifico, que en este juzgado de primera instancia y por su oficio se ha suscitado incidente de pobreza con las debidas formalidades, en que recuso la sentencia de este señor.

En la ciudad de Orense á 25 de mayo de 1869, el Sr. D. Manuel Fernández Bastos, juez de primera instancia de la misma y su partido, habiendo visto estos autos propuestos por Ramón Rivas de la Poveda, parroquia de Gustey, ayuntamiento de Coles, su procurador D. Francisco Martínez Santos, en solicitud de que se le habilite como pobre para litigar con D. Antolína Balbis, viuda de Sag Salvador de Pregueiro en el Perote de Aguiar.

Resultando de la información de testigos que los bienes que á Ramón Rivas pueden corresponderle pro indiviso con otros dos hermanos, que tiene en representación de su difunto padre, apenas producen, deducidos gastos de cultivo y contribuciones, un real diario.

Resultando que no tiene rentas, ni otra industria que la insignificante que recibe por dar lecciones de primetas, letras a niños algunas otras horas del día, dedicando la mayor parte á los labores del campo, que escasamente le podrá producir aquella ocupación otro real diario.

Bisultando de la comunicación expedida por el Alcalde de Coles, fecha 5 de abril último que Ramón Rivas no se halla inscrito en los repartimientos de la contribución territorial ni pocos en la de subsidio industrial.

Considerando que se halla comprendido en el art. 182 de la ley de Ejercitamiento civil;

Falla que debe de declarar y declarar pobre por alarma al Ramón Rivas para litigar con Doña Antolína Balbis, sin perjuicio de reintegro si mejorase de fortuna. Así por esta que, por rebeldía de la Doña Antolína, se notifique en estrados e inserte en el Boletín Oficial de la provincia conforme al art. 1100 de dicha ley, la pronunció, mandó y firma el expresado señor juez de que yo escribano y fe.

Manuel Fernández Bastos.—Antolína Santos de la Torre.

Y para cumplimiento de lo mandado, firmo la presente en este pliego, sello de pobres, en Orense á 30 de mayo de 1869.—Santos de la Torre.

ANUNCIOS OFICIALES.

Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras.

Ultimada la reforma del padrón